

# Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana

---

Miguel Angel Contreras Natera\*

Este trabajo aborda el quiebre en el imaginario del desarrollo como consecuencia de la instrumentación de las políticas de ajuste estructural en 1989, así como la resignificación del debate sobre la ciudadanía y la democracia tras la ofensiva neoliberal. Se examinan las estrategias de reelaboración y resignificación de la cultura política venezolana en clave tecnocrática y sus repercusiones en la profundización de la crisis de los partidos y el proceso de deslegitimación de lo político. Además, se reconstruyen las diversas modalidades de protesta y oposición de los sectores medios y las clases populares a la hegemonía neoliberal. En este contexto se estudia la emergencia de la politización de lo social desde la perspectiva de los nuevos actores. Se abordan las profundas transformaciones de lo político que introduce el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías. En todo caso, investiga los desplazamientos temáticos y la visibilización de nuevos actores sociales como rasgos fundamentales del escenario político. Por último, nos adentramos en los profundos dilemas políticos y culturales de los últimos dos años y sus riesgos potenciales para la consolidación de la democracia.

## La fractura del imaginario del desarrollo en Venezuela

La idea del desarrollo en Venezuela como imaginario de integración social y cultural, representada por las diversas variantes del discurso modernizador fue el sentido legitimador y orientador de la política y de las políticas durante la mayor parte del siglo XX. <sup>1</sup> Si bien los proyectos modernizadores no lograron su objetivo, esto es: la *modernidad* a imagen y semejanza de los países centrales, lograron transformaciones sociales, culturales y económicas graduales e importantes de dimensiones seculares en el país (Contreras, 2000: 46). A pesar de los limitados logros y los persistentes

---

\* Universidad Central de Venezuela. Investigador-becario del Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, Convenio UCV-Fundación Rockefeller.  
Correo electrónico: miguel-a-contreras@cantv.net

Contreras, Miguel Angel (2004) "Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana. En Daniel Mato (coord.), *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 111-132.

fracasos, existía la creencia generalizada de que el país había progresado paulatinamente hacia este objetivo a partir del restablecimiento de la democracia en 1958.<sup>2</sup> La democracia representativa como forma de régimen del Estado; los partidos políticos como mediadores de la representación política; el Estado como *promotor* del proceso de desarrollo económico y distribuidor de la renta petrolera constituyen los perfiles generales del discurso modernizador en el país de ese entonces. El *telos* de que Venezuela avanzaba gradual pero sostenidamente hacia la modernidad se mantuvo hasta finales de la década de los ochenta (Coronil, 2002: 407).

Más sin embargo, a mediados de la década de los ochenta los *mecanismos utilitarios de construcción de consensos* del modelo democrático representativo del 58 (Rey, 1989), que constituían el soporte tanto de los acuerdos políticos de las élites políticas como del compromiso de clase, comenzaron a erosionarse cuando el entrelazamiento entre la crisis del modelo de desarrollo con la crisis del endeudamiento alcanza tierras venezolanas y las fuerzas del mercado global hicieron que la renta petrolera se desplomase. Como consecuencia de la moratoria mexicana y el alza de las tasas de interés, el gobierno de Luis Herrera Campins se vio obligado a devaluar la moneda y establecer un sistema controlado de cambios para controlar la fuga masiva de capitales privados (Levine, 2001: 12; Roberts, 2003: 78-79). A mediados de los ochenta cuando la profundización de la crisis del modelo de acumulación basado en la renta petrolera, afectó a una mayoría absoluta de la población venezolana, sistemáticamente excluida de los beneficios materiales y simbólicos del modelo de desarrollo, la pobreza como fenomenología social y política se hizo *visible*.

De cualquier manera, las cargas económicas y sociales de la crisis del modelo de acumulación no eran compartidas por igual. El empobrecimiento económico y la fragmentación social creciente estaban acompañadas de cambios en la estructura de clases de la sociedad venezolana. Dos tendencias básicas predominaban al respecto: un cambio de las labores agrícolas e industriales a la de servicios, y otro de la economía formal a la informal.

Hacia finales de la década de los ochenta era evidente la necesidad de reorientaciones profundas en la economía y la política. Sin menoscabo de privilegiar algún tópico particular; las características más relevantes de la crisis eran, a saber: a)

- 
1. El concepto de juegos de lenguaje de Wittgenstein nos ayuda a aclarar el sentido que le otorgamos a la noción de *discurso*. Los juegos de lenguaje no son juegos, sino formas de vida: conjuntos de actividades lingüísticas y no-lingüísticas, de instituciones, prácticas y significaciones que en ellas se encarnan y toman cuerpo (1972: 41). Pero además, radicalizando las intuiciones de Wittgenstein, Laclau y Mouffe, enfatizan que los elementos lingüísticos y no-lingüísticos de un discurso no están meramente yuxtapuestos, sino que constituyen un sistema diferencial y estructurado de *posiciones divergentes y conflictivas* (Laclau y Mouffe, 1987: 124).
  2. El llamado Pacto de Punto Fijo suscrito el 31 de octubre de 1958, constituye el acuerdo de mayor importancia entre las élites políticas, por cuanto representa el compromiso de los principales partidos del momento AD, COPEI y URD de respaldar a quien resultara electo y conformar en torno al partido triunfador en las elecciones un gobierno de coalición. Las reglas de juego y los acuerdos políticos básicos cristalizaron en la Constitución de 1961 (Levine, 2001: 10).

inflación creciente; b) desequilibrios en los principales indicadores macroeconómicos; c) corrupción generalizada; d) deterioro de los salarios y de los servicios públicos; e) fuga privada de capitales; f) endeudamiento interno y externo progresivo; g) desencanto social y político de la ciudadanía; y por último h) agotamiento del modelo de desarrollo basado en la renta petrolera. Particularmente, la profundidad de las grietas en el imaginario del desarrollo se habían evidenciado dramáticamente a finales del gobierno de Jaime Lusinchi amenazando la estabilidad social y política del país (Lander, 1995: 75).

Más bien, se evidenciaba el carácter desigual y diferenciado de los sacrificios y de sus consecuencias más perniciosas. En definitiva, para ese entonces las tendencias configuraban un escenario de empobrecimiento económico y polarización social que profundizaba *de facto* una incipiente fractura simbólica y material de las *clases sociales* en Venezuela. Particularmente, la profundidad de las grietas en el imaginario del desarrollo se había evidenciado dramáticamente a finales del gobierno de Jaime Lusinchi amenazando la estabilidad social y política del país. La crisis fiscal del Estado venezolano prefiguraba la crisis social del país: los antagonismos sociales y políticos comenzaban a traslucir las divisiones posteriores de la sociedad venezolana, en tanto y en cuanto los problemas de legitimidad política entraban en franco conflicto con los problemas de la racionalidad económica (Lander, 1995: 75).

En enero de 1988, los entonces candidatos presidenciales Carlos Andrés Pérez por el partido Acción Democrática (AD) y Eduardo Fernández por el partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) suscribieron un acuerdo en el cual se comprometían incluir las reformas políticas y económicas propuestas por la COPRE en sus respectivos programas de gobierno.<sup>3</sup> El triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez por amplio margen y la apelación nostálgica de un *proyecto de modernidad inacabado*, congelaron transitoriamente la crisis de lo político en el país.<sup>4</sup> El 2 de febrero de 1989 en una fastuosa ceremonia con invitados internacionales tales como Fidel Castro en su primera visita a Venezuela desde 1959, Dan Quayle, en su primera visita como vicepresidente de Estados Unidos y otros 22 jefes de Estado invitados, asume por segunda vez Carlos Andrés Pérez la Presidencia de Venezuela.

El 16 de febrero de 1989, después de haberse creado una gran expectativa alrededor del programa de gobierno y ante la posibilidad de *revelaciones radicales*, el recién investido Presidente de la República anuncia ante el país un programa de ajus-

---

3. En diciembre de 1984, el entonces presidente Jaime Lusinchi crea mediante decreto la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) con el objeto de elaborar un proyecto de Reforma Integral del Estado de largo alcance, así como proponer acciones concretas e inmediatas para facilitar las reformas integrales.

4. Entiendo aquí *lo político*, siguiendo la diferencia que establece Chantal Mouffe como la dimensión de antagonismo y conflicto que existe en las relaciones sociales; antagonismo que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales. Mientras que *la política* apuntaría a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana pero en condiciones que son siempre conflictivas pues están atravesadas por lo político (Mouffe, 1999: 13-14).

te estructural concebido para generar cambios económicos sustantivos.<sup>5</sup> El programa es presentado por el presidente Carlos Andrés Pérez como “un gigantesco esfuerzo, que demanda una voluntad firme y una disposición para la austeridad y el esfuerzo que algunos todavía no entienden a cabalidad. Es una transformación política y social, pero ante todo, es un cambio cultural profundo, en el cual los valores del esfuerzo, la producción, el trabajo, la solidaridad social, se coloquen en el primer lugar. Hay que desterrar el facilismo, el consumismo y la idea de aquí no ha pasado nada, [...]. *Es el gran viraje*” (Carlos Andrés Pérez citado por Kornblith, 1998: 121) [énfasis mío, M.A.C.].

El gran viraje comprendía decisiones urgentes y radicales para alcanzar la senda del crecimiento económico<sup>6</sup>. En todo caso, esto significaba flexibilizar el mercado laboral y desmontar las estructuras sindicales establecidas, liberalizar los controles de precios, aumentar las tasas de interés incluyendo las preferenciales, privatizar las empresas públicas en función de la disminución del gasto fiscal, romper las barreras proteccionistas para permitir una mayor afluencia de capital extranjero y/o permitir la salida a los mercados externos de productos nacionales. La lógica del programa descansaba en la búsqueda de una mayor apertura externa vía aumento y diversificación de las exportaciones, con énfasis en el mercado y el capital privado, la liberalización comercial externa e interna y la minimización del papel del Estado en la economía, que debía comenzar por reducir su déficit fiscal. La principal medida a tales fines era la unificación cambiaria a nivel del mercado libre, que implicaba una hiperdevaluación del bolívar. Esta abarataría las exportaciones, incrementándolas y simultáneamente, reduciría las importaciones, al encarecerlas.

La liberación del mercado presuponía el objetivo de ampliarlo y, con ello, las oportunidades de inversión y realización del capital internacional. Por consiguiente, la política económica que administra las nuevas condiciones creadas deja de ser necesariamente *nacional*.<sup>7</sup> El programa de ajuste estructural expresaba con claridad las redefiniciones entre economía y política que el Gobierno de Pérez le proponía al país.

5. Carlos Andrés Pérez se había forjado una imagen de líder tercermundista que, junto a la pletórica abundancia del imaginario de su gobierno anterior, fueron utilizados para proyectar la figura de un estadista experimentado con capacidad de negociar mejores acuerdos económicos para el país. La profunda convicción en sus capacidades para encauzar el creciente descontento de la población y de dotar de nuevos sentidos el futuro del país se convirtieron en un *suplemento* en el sentido derridiano del naciente mito de apertura de nuestra economía.
6. El equipo de gobierno del presidente Pérez estaba conformado por Pedro Tinoco (presidente del Banco Central de Venezuela), Egleé Iturbe (ministra de Hacienda), Miguel Rodríguez (ministro de Cordiplan), Gerver Torres (Fondo de Inversiones de Venezuela) y Moisés Náim (ministro de Fomento) quienes eran presentados como lo más granado de la *tecnocracia venezolana*, los posteriormente llamados *IESA-boys*. Sobre el sustrato arquetípico de estarnos adentrando en un nuevo espíritu de época, la tecnocracia venezolana es proyectada como el asiento fundamental de la nueva institucionalización del país, como el encauzamiento definitivo en una senda de crecimiento económico.
7. Andrés Sosa Pietri presidente designado de PDVSA comenzó a *desarrollar* una estrategia de internacionalización de la industria petrolera. En este sentido, se promovió una mayor participación del sector privado (principalmente del inversionista extranjero) para acometer los ambiciosos planes de internacionalización de la industria, los cuales requerían niveles altos de financiamiento y por consiguiente de endeudamiento externo. El proceso de apertura de 1989 *consolidaría* a la postre la

Redefiniciones que minaban las ya menguadas bases fundacionales del Pacto de Punto Fijo y que apuntaban a la construcción de nuevas relaciones y mediaciones entre el Estado y la sociedad civil, y entre economía y mercado.<sup>8</sup> Para ser precisos, habría que agregar que hubo al mismo tiempo una inversión de las prioridades, por la que se privilegió la gestión de los equilibrios macroeconómicos por encima de los mecanismos de integración social (empleo, salud y educación).

En realidad, la estrategia neoliberal perseguía eliminar del sistema productivo cargas y trabas legales para favorecer la libre competencia y la globalización de la economía venezolana. El desmantelamiento de las políticas de seguridad social, la flexibilización laboral y la precarización del empleo implicaban un proceso de largo alcance de dislocación tanto estructural como actitudinal y cambios en las formas de interpelación de la población. Para ello, era necesario socavar y desmantelar los valores y expectativas del Estado populista de conciliación nacional, como lo enfatizara el presidente Pérez en su alocución sobre el Gran Viraje, para que el cambio deseable fuera posible.

La aplicación de las políticas de ajuste estructural *sugeridas* al país por el FMI, e instrumentadas con la *anuencia* de importantes sectores nacionales, se convirtió en un elemento determinante para impulsar los procesos de reestructuración pro-

---

alianza *forjada* años atrás entre la compañía petrolera nacional con las compañías petroleras extranjeras. Ambas tenían como objetivo fundamental reducir el papel del Estado y desmantelar el marco político-institucional que había propiciado la nacionalización de la industria petrolera. Para ello, era necesario diseñar una estrategia que evitara la *regulación del gobierno* a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de su política de maximización de ingresos fiscales. Los objetivos iniciales de esta asociación no eran *per se* la privatización de la industria (Mommer, 2003: 169).

8. El programa de ajuste estructural implicaba un distanciamiento del presidente Pérez respecto al partido de gobierno AD y de la política de concertación anunciada en su campaña electoral. La ruptura entre el programa electoral y la política *de facto* del gobierno de Pérez *anunciaba* el resquebrajamiento de los soportes histórico-institucionales de la democracia representativa venezolana. Como un claro indicador de la profundidad de la ruptura planteada por las políticas de ajuste estructural, el presidente Pérez no sólo se había declarado contrario al neoliberalismo y al FMI en la campaña electoral de 1988, sino que había sido ponente de la Comisión del Sur — primero en Kuala Lumpur y luego en México— con la tesis del bienestar social como objetivo de los gobiernos del Sur. No habría que olvidar que una de las matrices fundamentales de la Comisión es la acción directa colectiva respecto a la deuda externa, como expresión de la búsqueda de un desarrollo del Sur menos dependiente del Norte. Antes bien, la justificación del programa de ajuste estructural se realizaba apelando al modelo elitista de democracia. En este sentido, en el modelo schumpenteriano de democracia (elitista) no existe ninguna pretensión de que los votantes establezcan la agenda política; los votantes ni generan los temas a tratar ni eligen las políticas. Más bien, las élites políticas agregan los intereses y deciden cuáles habrán de ser relevantes políticamente. Además, ellos seleccionan los temas y estructuran la opinión pública. Los votantes son consumidores, las élites políticas son los empresarios que ofrecen programas alternativos; son ellos los que crean la demanda, respetando la soberanía del consumidor sólo en lo que se refiere a la decisión de los votantes respecto a cuáles de los candidatos preseleccionados serán sus representantes. La democracia aparece reducida a la *rational choice* en la que el ciudadano se enfrenta a los dilemas políticos con las mismas disyuntivas que un consumidor hace frente a sus elecciones de este o aquel producto. Este modelo de negociación, competencia, acceso y responsabilidad se deriva más del mercado que de los anteriores modelos de ciudadanía (Contreras, 2003).

ductiva en el país.<sup>9</sup> Ello es un indicador de las complejas interrelaciones y alianzas entre actores transnacionales y locales en la construcción del soporte comunicacional, económico y político de las políticas de ajuste recién instrumentadas (Lander, 1995: 162). Fundamentalmente, con la emergencia del discurso neoliberal y principalmente con las primeras intervenciones públicas del ministro de Cordiplan Miguel Rodríguez, se inicia un debate sobre la necesidad de refundar la democracia (en un sentido schumpeteriano), redimensionar el Estado y sus funciones (mínimo) y resignificar la idea de ciudadanía con una clara orientación individualista y competitiva.

Para el equipo de gobierno del presidente Pérez, el Gran Viraje implicaba el surgimiento de una nueva forma de intervención estatal, mediante la cual nuevos medios y nuevas áreas se ven influidas por el Estado, mientras otras son declaradas de venta libre y transferidas al sector privado (salud, educación y vivienda). Desde la perspectiva del discurso neoliberal, el Estado venezolano sólo había logrado promover la pasividad entre los  *Pobres*, desmejorando sus oportunidades y creando una *cultura de dependencia*. Lejos de aportar una solución, el Estado había perpetuado el problema de reducir a los ciudadanos al papel de clientes inactivos de una tutela burocrática. El Estado venezolano había fomentado la pereza y el absentismo, la apatía de los ciudadanos ante la exigencia de que sean ellos los que busquen *la satisfacción de sus deseos*. Para el discurso neoliberal, esto implicaba tanto el desplazamiento del Estado de conciliación populista, como la construcción del *mercado* como un nuevo principio alocativo para la sociedad venezolana.

Así pues, esta construcción simbólica y política del mercado como mecanismo de integración de la sociedad tenía entre sus supuestos fundamentales la idea siguiente: el mercado es el procedimiento objetivo de ajuste entre los deseos, que son libres, y los bienes, que son limitados. En tanto procedimiento objetivo y no-discriminatorio, el mercado se mueve gracias a las preferencias libres de los individuos y carece por tanto de *coacción*. La noción de libertad por ausencia de coacción—libertad negativa— defendida por el emergente discurso neoliberal, alude a la libertad de que dispone un individuo para emprender, producir, inventar, *morirse de hambre*, programar su vida, siguiendo su interés o su espíritu de generosidad, modelando su existencia por patrones originales o imitados, aceptando un camino de mediocridad o de grandeza. El nuevo consenso generalizado, para usar la medulosa expre-

---

9. En el plano interno el discurso neoliberal contaba con un conjunto de prestigiosas instituciones e intelectuales de renombre nacional para su estrategia de producción de hegemonía. Por un lado, el Instituto Económico Superior de Administración (IESA) financiado por la banca nacional se había consolidado como una sólida plataforma de discusión de las ideas neoliberales. El IESA era un espacio privilegiado de debate de cuestiones técnicas en donde concurrían empresarios, gerentes y profesionales de diversas disciplinas. Por el otro, Emeterio Gómez reconocido economista neoliberal, profesor universitario y miembro de Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) se había convertido en uno de los principales impulsores de la bibliografía liberal y un *experimentado* comentarista de la economía venezolana durante los años noventa. El Grupo económico Roraima también jugaba un rol fundamental de sedimentación de la ideología neoliberal. No habría que olvidar el papel de Marcel Granier en Radio Caracas Televisión con su programa dominical de opinión llamado Primer Plano. Faltaría espacio para incluir todo el conjunto de operadores y difusores de las ideas neoliberales en el país.

sión de Lóic Wacquant, *ya no es aliviar la situación de los pobres sino más bien librarse de ellos, borrándolos de la agenda de las preocupaciones públicas.*

Once días después del anuncio de las medidas económicas, entre los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar en las ciudades más importantes del país un sorpresivo y multiforme estallido social, conocido posteriormente como el *Caracazo*. La magnitud del acontecimiento estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional. Dado el carácter simultáneo, extensivo, masivo y sorpresivo, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas muy rápidamente por los acontecimientos en las principales ciudades del país. En vista del desbordamiento colectivo, hacia el mediodía del día 28, el presidente Pérez reunido con el equipo de gobierno resolvió suspender un grupo de garantías constitucionales y decretar estado emergencia, a la vez que convocaba a las Fuerzas Armadas para asumir el control del orden público y por consiguiente reprimir la revuelta social.

Comenzaba con el toque de queda y la restricción de las garantías constitucionales, la segunda fase del 27 de febrero, una fase represiva, en la cual los militares entraron a controlar la situación en los barrios populares produciéndose toda clase de excesos y represiones (Kornblith, 1998: 1-3; López Maya, 1999: 209-220; Coronil, 2002: 417). Con las medidas económicas de emergencia anunciadas como consecuencia del *Caracazo* (aumento general de salarios e inamovilidad laboral, subsidios a los intereses hipotecario, etc.) y las reformas políticas urgentes (descentralización político-administrativa) que comienzan a discutirse el gobierno de Pérez, los partidos AD y COPEI y diversos intelectuales de la COPRE recentraban y reconstituían momentáneamente la armazón política de país. Las medidas buscaban minimizar las efectuaciones políticas y sociales del 27 y 28 de febrero, sin implicar un cambio de rumbo de la política económica.

Las profundas significaciones imaginarias del ideal de desarrollo que orientaron los decursos de las acciones sociopolíticas de las últimas tres décadas, se habían fracturado irreversiblemente con los acontecimientos de febrero del año 1989. De cualquier manera, las tendencias crecientes hacia la des-convencionalización y la pluralización de prácticas sociales entrañaban, un abismal aumento entre los *espacios de experiencias* de los venezolanos y sus *horizontes de expectativas*, permitiendo la emergencia de un conjunto de renovadas lecturas de los procesos sociohistóricos del país y, por consiguiente, abriendo el espacio para una multiplicidad de realizaciones societales posibles (Koselleck, 1993: 338). De modo tópico, los acontecimientos de febrero del año 1989 configuraban un *kairós transformacional* que apuntaba a crear nuevos sentidos y coherencias de las acciones individuales y colectivas de la población venezolana.

Antes bien, y como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, la profunda pugnacidad política en Venezuela se libraba en torno al trazado de fronteras sobre diseños alternativos de democracia. Trazados que significaban la redefinición de las relaciones sociales existentes, de las culturas políticas y de las formas de interpelación de la población venezolana. En la medida que la cultura se apreciaba como ámbito de creación de sentido de la lucha política y la lucha cultural como instrumento de construcción de nuevos decursos de acción social y político, se

redefinían las relaciones entre cultura y política para estabilizar en discursos, instituciones y acciones el orden social y político emergente (Dagnino, 2001: 69).

Particularmente, se evidenciaba la fuerza configuradora de tres tendencias con decursos de acción que implicaban horizontes de realización inconmensurables entre sí, horizontes que expresaban conflictos y tensiones agudas, así como la profunda desarticulación institucional del país. El primero de ellos se refería a la recuperación y reconstrucción de la legitimidad política que tenía a AD y COPEI como sus portavoces fundamentales. Segundo, desde la perspectiva de los actores vinculados a sectores empresariales (Fedecámaras) y a altos funcionarios del gobierno de Pérez, se impulsaba un discurso que se centraba en crear nuevas bases económicas y políticas para insertarnos en la senda de la globalización. Y por último, el emergente ciclo de protesta que se activa desde 1989 y que apuntaba a la defensa de derechos sociales amenazados y a una profundización de la democracia, en donde los actores principales eran la clase media profesional, las clases populares, partidos políticos emergentes como Causa Radical (Causa R), pensionados y desempleados.

En primer lugar, a pesar de los profundos desacuerdos sobre las salidas políticas a la crisis, AD y COPEI reclamaban para sí, el monopolio de la autoridad para producir las representaciones de la política. En consecuencia, la renovación partidaria constituía la prioridad del programa reformista.<sup>10</sup> Desde la perspectiva del debate sobre las reformas, *la política* puede ser vista como el intento de AD y COPEI de recuperar la hegemonía perdida, fracturada con la profundización de la crisis económica y los acontecimientos de febrero del año 1989.<sup>11</sup> Es decir, las prácticas políticas de AD y COPEI pretendían producir un *orden suturante* en la medida en que lo social como *clausura* se había develado conflictivo y antagónico (Laclau y Mouffe, 1987: 53).

El proceso agonístico y tardío de reconstrucción de la hegemonía política obedecía a la convicción perceptual y política de los actores fundamentales del sistema,

- 
10. La Ley Orgánica de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado promulgada en agosto de 1988 y reformada en abril de 1989; la Reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que creó la figura del alcalde y su respectiva elección y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público promulgada en diciembre de 1989, representan el marco normativo que regula el funcionamiento del proceso descentralizador en sus inicios. En diciembre de 1989 se eligen por vez primera en la historia republicana del país gobernadores y alcaldes de manera universal, directa y secreta, con lo cual aparecen en escena nuevos liderazgos. Estos instrumentos jurídicos conjuntamente con la Reforma a la Ley Orgánica del Sufragio le imprimen una dinámica novedosa a la realidad sociopolítica del país (Contreras, 2003).
  11. El 6 de junio de 1989 se designó la Comisión Bicameral Especial para la Revisión de la Constitución. El mandato de la Comisión era revisar a fondo la Constitución, a fin de detectar vacíos en el texto o en la legislación ordinaria que lo debe acompañar, de modo de actualizar uno y otro además adecuarlos a las exigencias institucionales. La proposición fue formulada por el senador Godofredo González (COPEI) y aprobada por unanimidad en la Cámara del Senado. La Comisión quedó integrada por los senadores Rafael Caldera (COPEI); Pedro París Montesinos (AD) presidente del Congreso, como vicepresidente de la Comisión, así como un conjunto representativo de diputados. En el transcurso se retiraron algunos miembros de la Comisión mientras que se incorporaban otros. Las vicisitudes y cambios atendiendo los complejos procesos sociopolíticos que van de 1989 a 1992 han sido analizados por Kornblith (1998: 65).



de estar frente a *contingencias puntuales de ingobernabilidad*. Sin embargo, en la medida que se profundizaba la crisis de los partidos las posibilidades de llegar a acuerdos y sostenerlos se hacía particularmente precaria. En un ambiente de fragilidad institucional, los partidos políticos no lograban presentar como creíbles las reformas institucionales propuestas, al tiempo que se fueron generando un conjunto diversificado de nuevas agrupaciones políticas que retaban el monopolio partidista (Contreras, 2003). “Al romperse la identificación entre partido, Estado y organización popular, se abrió un campo de posibilidades más diversas para el crecimiento de la sociedad civil” (Gómez Calcaño, 1997: 23).

En segundo lugar, las transformaciones en la forma de hacer política favorecía al emergente discurso sobre la sociedad civil en detrimento de los partidos políticos. Los antecedentes inmediatos de estas transformaciones pueden observarse en las décadas de los setenta y los ochenta. La emergencia de grupos como el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), las publicaciones del Grupo Roraima tales como *Más y Mejor Democracia*, un abanico de nuevas ONG y las organizaciones vecinales de clase media alta representan los actores principales del discurso sobre la sociedad civil. Con la anuencia de poderosos grupos económicos y la participación de altos funcionarios del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el discurso neoliberal se asentaba en la idea de sociedad civil de estas organizaciones, que tenían una larga tradición organizativa y política en el país. Como es sabido la idea de la sociedad civil había estado en el centro del proceso de resignificación del imaginario de la democracia y es definida por estos actores excluyendo a los partidos políticos y al Estado.

Esta concepción de la sociedad civil estaba basada en el modelo de funcionamiento del mercado y se convirtió en un eficaz instrumento teórico e ideológico para el cuestionamiento y deslegitimación de los partidos y el Estado. Pero además, la asociación explícita entre sociedad civil y propiedad privada es construida como una relación que debía mantenerse *inviolable en el tiempo*. Esta asociación permitió también el vínculo entre medios de comunicación y sociedad civil.<sup>12</sup> Al ser pensados los medios como parte de la sociedad civil, el tema de su incidencia social y/o política no estaba problematizado (Lander, 1996: 132-133).

Posteriormente, con la aparición de liderazgos emergentes como consecuencia de la descentralización político-administrativa confluyen los actores de la socie-

---

12. El 6 de agosto de 1992, la Comisión Bicameral Especial para la Revisión de la Constitución recibió las primeras conclusiones de las subcomisiones. Entre las conclusiones recibidas estaban incluidos algunos tópicos sobre la necesidad de regular los medios de comunicación social. Se decidió aprobar el derecho a réplica y procurar una redacción de mayor consenso para el artículo referido al monopolio de los medios de comunicación. Algunos diputados opuesto a los artículos sobre los medios salvaron su voto o se retiraron del debate. Entre ellos se encontraban Oscar Yanes e Isilio Arriaga (COPEI), María Teresa Castillo, Miguel Enrique Otero, Ramón José Medina (independientes por COPEI), Reinaldo Cervini (independiente por URD), Jesús Valderrama (GPI), José Guadalupe Polanco por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Alfredo Vetancourt (COPEI-Carabobo). El pugnaz debate sobre los artículos referidos a los medios de comunicación tiene lugar dentro y fuera del parlamento. Un claro indicador de ello es la pertinaz campaña que se cernía sobre los mencionados artículos.[continúa]

dad civil con los nuevos liderazgos territoriales en el discurso de una *democracia de ciudadanos*. En su núcleo esta nueva estrategia de democracia de ciudadanos no tendía a favorecer el gobierno partidario, sino más bien a eliminarlo. Para lograr tal estrategia y liberarse de las constricciones partidarias, se cuestionaban a los partidos y se juzgan los planes y su ejecución *con las normas del gobierno eficiente* (sin el lastre de los partidos). De allí, la tendencia a pensar la plausibilidad de encontrar *soluciones objetivas a los problemas sociales y económicos* estableciendo una prudente mezcla de corrección institucional y juicios emitidos por expertos no partidistas.

Esto coincidía con la *espectacularización de la figura del empresariado venezolano*. El empresariado era investido de una superioridad manifiesta, por su independencia y por la conciencia de que sólo el esfuerzo individual hacía posible la acción económica racional. Para los embriones del *yuppy* la figura del empresario era un nuevo modelo social a seguir. Este se estaría convirtiendo para ciertas capas de la población —ejecutivos de las empresas transnacionales, altos funcionarios del equipo de gobierno y jóvenes empresarios— en un medio de expresión del Yo. Frente a una concepción social del Estado, los actores empresariales —con la anuencia del alto gobierno— defendían un Estado que se limitara a cumplir las funciones mínimas que el neoliberalismo le asignaba. Todo cuanto alimente la dependencia con respecto al Estado debe ser eliminado, porque engendra una mentalidad pasiva y desesperanzada.

El individualismo que subyace al discurso neoliberal no sólo se muestra en la prioridad del individuo frente a la colectividad, sino también implicaba un cambio en la comprensión del trabajo. De cualquier manera, se avanzaba en un campo de profundas redefiniciones del papel del Estado con un énfasis hacia la exigencia de un Estado neo-liberal, no interventor, con una reducción significativa de su injerencia en la actividad económica. La radical despolitización de la vida colectiva es acentuada por la resignificación y miniaturización del espacio de lo público.

En todo caso, las tendencias de oligopolización del juego político en el país facilitaron la sedimentación del discurso neoliberal. Como es sabido, la democracia representativa había desarrollado rasgos de una democracia liberal-elitista a finales de la década de los setenta. Estos rasgos eran principalmente antidemocráticos y autoritarios, pues, significaban que un conjunto de importantes decisiones de naturaleza socioeconómica, quedaban al margen del control y debate democrático, para tener lugar de acuerdo a criterios y argumentos técnicos, en un escenario especializado en el que tenían una presencia privilegiada sectores e intereses especiales (Rey, 1989: 298). El funcionamiento especializado y autonomizado del sistema económico se convirtió entonces en el objetivo fundamental del debate político. El diagnóstico sobre la crisis y las salidas políticas que vivía el país se dan exclusivamente en un

---

12. [Continuación] Para el 8 de septiembre, se desató una campaña sistemática coordinada entre todas las asociaciones empresariales de la radio, la televisión y la prensa escrita en contra de lo que señalaban como un intento de retaliación de los partidos políticos hacia los medios por sus denuncias sobre la corrupción pública. Estos llamaron la reforma constitucional como *reforma mordaza* (Kornblith, 1998: 95).

terreno tecnocrático. Se minimizaba el debate sobre las implicaciones del nuevo modelo económico basado en la apertura del mercado nacional <sup>13</sup>.

Por último, el discurso neoliberal de Pérez y de sus ministros los llamados *IESA-boys* (en alusión a la pertenencia de varios de ellos al IESA: Instituto de Estudios Superiores en Administración) opera también en un trasfondo de profundas resistencias políticas, sociales y culturales al programa de ajuste estructural. La profundización de las protestas sociales y los antagonismos culturales desde 1989 configuraban un campo ético/político distintivo. Aquí podemos entrever la emergencia de una política cultural de redefinición de fronteras, imaginarios y subjetividades en un escenario de franco conflicto entre *proyectos de país emergentes*. Febrero de 1989 señala la reapertura de un ciclo de protestas de la sociedad venezolana. La visibilización de las luchas por la defensa de derechos sociales amenazados movilizó y estimuló otros movimientos, conformando un ciclo de protestas:

Al hacerse evidentes las vulnerabilidades del sistema político y, por ello, abrigarse la esperanza de poder alterar las relaciones de poder, tanto organizaciones convencionales como grupos pocos conocidos e incluso gente común y corriente vieron propicia la ocasión para elevar demandas y obtener algún provecho. Las protestas de aquellos grupos con largas historias de conflicto en la sociedad intensificaron la movilización que ya venía *in crescendo*; pronto les siguieron otros ciudadanos que sin tradición de protesta se engancharon en el tren (López Maya, 1999: 221).

Comienzan entonces a emerger otras líneas de acción política, en las que se trasciende su dimensión política institucional que ineluctablemente constituye un sitio de regulación y de clausura de los alcances de lo político. Esta nueva línea de acción, por el contrario, va a enfatizar el carácter conflictivo e incierto que produce lo político como efecto de sentido. En efecto, muchos movimientos sociales y protestas populares surgen como respuestas de autodefensa ante el fracaso de las mediaciones entre la sociedad y el Estado, fracaso que se traduce en su exclusión de decisiones que los afectan directamente. Su marcado empeño en diferenciarse de organizaciones tradicionales se opone a la formulación de programas detallados y explícitos. Estas acciones colectivas obedecían a una lógica de cambio estructural incipiente, respaldadas por el convencimiento de los participantes de que eran correctas y legítimas.

En un contexto de aguda fragilidad institucional, desencanto político y frustración social, los sectores populares, la clase media profesional (médicos y profesores universitarios), desempleados, pensionados y nuevos partidos políticos como la Causa R defendían derechos sociales amenazados (salud y educación principalmente), a

---

13. A pesar de que uno de los primeros objetivos que se plantean en el programa de gobierno de Carlos Andrés Pérez para lograr la Otra Venezuela que todos queremos son los de liberar al país de la presión de la deuda externa y de la dependencia del petróleo, se formula un plan de inversiones calculado en 50.000 millones de dólares entre 1991 y 1996. Sólo para el año 1991, PDVSA presentó al MEM un programa de inversiones superior a 200.000 millones de bolívares, lo que representa casi la tercera parte del monto total del presupuesto nacional para ese año. Un monto de recursos de esa magnitud significa una concentración aún mayor de la economía venezolana en función del petróleo (Lander, 1995: 79).

la par que realizaban un conjunto de nuevas exigencias que pugnaban por instalar una definición de democracia que ampliará sus alcances de la democracia representativa hacia una democracia participativa. La profunda aunque indirecta influencia de la movilización popular así como la alteración del espacio público implicaban de suyo un cambio en la experiencia ciudadana y en el propio aprendizaje democrático del país.

Entre 1989 y 1992 la pluralidad de acontecimientos críticos debilitaba progresivamente la densidad simbólica de la democracia representativa, como consecuencia de la crisis en las formas de mediación Estado-sociedad y sobre todo por los efectos culturales de la resemantización del discurso neoliberal. Los partidos políticos habían sucumbido ideológica y discursivamente ante la eficacia simbólica de la estrategia del discurso neoliberal. Antes bien, la diferencia entre los partidos no remite simplemente a determinados intereses e ideologías. También es un testimonio de las respuestas posibles a las cuestiones que la sociedad debe encarar. Más sin embargo, los partidos encerrados en sus luchas por la preservación del poder y abandonados a toda pretensión de representar posturas ideológicas en pugna, comenzaron a perder la capacidad de capturar la pluralidad del imaginario colectivo de los venezolanos. En este contexto, el discurso neoliberal se consolida culturalmente como un programa que no requería defensa frente a propuestas alternativas.

En los inicios de febrero de 1992 las contradicciones políticas entre sectores de AD y el equipo tecnocrático del gobierno de Pérez eran evidentes. El debate público sobre el salario mínimo entre el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Juan José Delpino, militante del partido Acción Democrática y el gobierno eran tensas, a su vez que minaban la menguada legitimidad del gobierno. Pero, además, esto contrastaba abiertamente con las solicitudes públicas por parte del presidente de Fedecámaras Freddy Rojas de privatizar la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y profundizar los objetivos del programa de ajuste estructural. Por otra parte, una larga huelga en el sistema educativo y la posibilidad de allanamiento de la Universidad Central de Venezuela (UCV) estaban también como temas de la agenda pública de inicios de febrero de 1992 (*El Nacional*, 3/2/92).

Más sin embargo, el 4 de febrero de 1992 una fallida rebelión militar encabezada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías resquebrajó los cimientos de la democracia representativa venezolana pero también, la legitimidad del programa de ajuste estructural. Con el fracaso de la rebelión del 4 febrero del año 1992 el país se enfrentaba a cambios irreversibles en sus decursos de acción. El 19 de febrero el FMI y el Banco Mundial enviaron señales de alarma ante anuncios de posibles *contra-paquetes* para enfrentar la grave situación política suscitada por la rebelión militar del 4 de febrero (*El Nacional*, 19/02/92). La inminencia de otra rebelión militar y los profundos desajustes políticos marcaron con su impronta los debates políticos de 1992.<sup>14</sup> Los críticos acontecimientos sociopolíticos prefiguraban cambios sustantivos

---

14. Rafael Caldera, uno de los firmantes fundamentales del Pacto de Punto Fijo, en su intervención en la sesión extraordinaria convocada para discutir políticamente las repercusiones de la rebelión militar del 4 de febrero en el Congreso de la República, advertía sobre la necesidad de instrumentar [continúa]

en la dinámica interna del país. El 27 de noviembre de 1992 otra fallida rebelión militar marca con un *signo indeleble de muerte* al gobierno del presidente Pérez. Desde ese momento, la destitución del Presidente y la búsqueda de un Presidente sustituto, entre los que se encontraban candidatos surgidos del proceso de descentralización, se convierten en los objetivos fundamentales de un conjunto de actores políticos vinculados a la *sociedad civil*.

En diciembre de 1993, luego de una brillante campaña electoral abiertamente anti-neoliberal y con un mensaje de retorno a los fundamentos del social-cristianismo, triunfa en las elecciones presidenciales el candidato de un grupo de asociaciones políticas agrupadas alrededor del naciente partido político denominado Convergencia, Rafael Caldera. Durante los dos primeros años de gestión del presidente Caldera intentó instrumentar medidas económicas heterodoxas para superar la crisis económica y política. Más sin embargo, las redefiniciones entre la economía y la política iniciadas por Pérez tenían un soporte institucional nacional e internacional que estaba lejos de languidecer en el tiempo. En todo caso, con un contexto internacional adverso y con la más dramática crisis financiera del siglo, el gobierno de Caldera se vio *forzado* a instrumentar un programa de ajuste estructural que llamaría la Agenda Venezuela (Coronil, 2001: 426).

Como parte integrante de la estrategia de reestructuración económica de la Agenda Venezuela se profundizó la apertura petrolera iniciada en 1989. Con esta política se estableció un marco normativo para la entrada de capital transnacional a las actividades primarias en condiciones desfavorables para el país. Pues se redujo el ingreso fiscal petrolero, se renunció a la soberanía jurídica e impositiva y se entró en abierta confrontación con los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al *privilegiar volúmenes sobre precios* (Lander y López Maya, 2003:15). La priorización de volúmenes sobre precios fue la punta de lanza de la política de internacionalización de la industria petrolera bajo la presidencia de Luis Guisti en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y se centraba en la recuperación de segmentos del mercado internacional.

En febrero de 1998, parecía inminente el triunfo de Irene Sáez ex-alcaldesa del municipio Chacao en las elecciones presidenciales. En la campaña electoral de 1998 existía un abrumador consenso sobre la necesidad de profundizar el proceso de reestructuración económica y política iniciado por Pérez en 1989 y continuado por Caldera. Se proponía públicamente la menesterosidad de privatizar las empresas estatales e inclusive en crecientes ámbitos políticos y económicos se discutía sin reparos la opción de privatizar PDVSA.<sup>15</sup> Más sin embargo, el ascenso vertiginoso en las

---

14. [continuación] cambios urgentes y profundos en el sistema político venezolano. Para él, era inminente otra rebelión militar si no se atendían los desafíos representados por la fallida rebelión (*El Nacional*, 06/02/92).

15. Uno de los precandidatos presidenciales a la contienda electoral de 1998 era Luis Guisti presidente de PDVSA durante la gestión presidencial de Rafael Caldera. Por motivos de cálculo político dicha candidatura no se hizo pública y tuvo que ser desmentida públicamente. De cualquier manera, internamente en PDVSA existía una agenda liberal que coincidía completamente con el proceso de internacionalización de la industria. Este proyecto político disfrutaba de un incondicional [continúa]

encuestas del candidato el teniente coronel (retirado) Hugo Chávez Frías a mediados de año, tuvo entre sus implicaciones más relevantes una nueva estrategia por parte de AD y COPEI para contener las efectuaciones de un posible triunfo de Chávez. Esta estrategia consistió básicamente en cambiar el calendario electoral separando las elecciones legislativas y de gobernadores de las presidenciales (Parker, 2001: 32).

Para finales de 1998 el país se enfrentaba a un profundo dilema. Dilema que se resumía políticamente en la competencia electoral entre un Polo Democrático y un Polo Patriótico. Por el lado del Polo Democrático, existía un consenso alrededor de la necesidad de profundizar la reestructuración económica iniciada por el gobierno de Pérez, en el que coincidían AD, COPEI, Proyecto Venezuela, la Causa R y los partidos vinculados a la candidatura de Irene Sáez. Este proyecto no tenía el carácter inicial de 1989, aunque en sus aspectos fundamentales era un discurso modernizador neoliberal similar al instrumentado por Pérez con anterioridad. Se había incorporado en el discurso aspectos sobre la compensación social destinados a los grupos más vulnerables del país para enfrentar el posible déficit de legitimidad.

En lo relativo a la idea de ciudadanía, la referencia básica era impulsar los derechos de libertad y de propiedad privada como la punta de lanza de las exigencias de la sociedad civil en su lucha contra el Estado venezolano. La propiedad privada fijaba la separación entre una esfera protegida de libertad individual y el ámbito legítimo de la autoridad estatal. Desde una perspectiva revisitada del discurso neoliberal, los derechos civiles individuales se entendían no sólo como fundamento y finalidad genérica del Estado, sino también como su límite. Son en resumidas cuentas, los *reinterpretados* derechos civiles de primera generación y que, por su inspiración estrictamente individualista, tienen como titular al individuo como sujeto de derechos.

Por el otro lado en el llamado Polo Patriótico, se encontraba la candidatura de Hugo Chávez Frías con la propuesta de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Dicha propuesta contaba con un conglomerado de partidos políticos minoritarios y organizaciones emergentes y se centraba principalmente en un revisitado proyecto político de corte nacionalista. El proyecto nacionalista implicaba entre otras cosas reorientar la política petrolera que había sido dominante en los últimos diez años. Y además, suponía la defensa de la idea de soberanía nacional. Para los portavoces más relevantes del proyecto político del Polo Patriótico era necesario dirigir los

---

15. [continuación] respaldo de los países desarrollados y de las compañías petroleras internacionales. La agenda liberal implicaba de suyo el desmantelamiento definitivo de las estructuras de la política de nacionalización. El objetivo de la agenda liberal es simple, la tierra es para quien la trabaja. Es decir, el acceso libre a los[continúa] recursos naturales para las compañías productoras y consumidoras de petróleo. En este contexto Venezuela a través de PDVSA y consistente con su agenda liberal, se vinculaba a la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin reservar ningún derecho especial con respecto al petróleo. De acuerdo con la visión adoptada por PDVSA, más que una palanca para la promoción del desarrollo nacional, los recursos naturales significan una ventaja para atraer inversiones extranjeras. Como parte de la agenda liberal y de sus estrategias de producción de hegemonía, no habría que perder de vista la intensa y costosa campaña internacional de promoción de la figura de Luis Giusti como hombre del año en la industria petrolera mundial (Mommer, 2003: 177).

esfuerzos hacia la creación de nuevas normas constitucionales que permitan un desarrollo revolucionario, pacífico y democrático de la sociedad nacional.

El planteamiento de Chávez giraba alrededor de un proyecto de consolidación del Estado-nacional que revalorizaba su rol en la salud, la educación y la justicia social. El proyecto político de Chávez hacía referencias importantes al *proyecto de la Tercera Vía* de Tony Blair. Simultáneamente, el discurso con un alto contenido moralizante enfatizaba la necesidad de consolidar una ciudadanía igualitaria de amplia base y supuso para ese entonces reclamos ético-morales a la dirigencia política de los partidos vinculada al Pacto de Punto Fijo. Ello suponía la defensa del Estado social de derecho como corrector de las disfunciones de la economía de mercado. Lo que traía como consecuencia la necesidad de incluir en el sistema de los derechos fundamentales no sólo a las libertades clásicas, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales como categorías accionables y no como meros postulados programáticos. Dentro de esta categoría se incluían derechos cuyo objeto es el trabajo, la vivienda, la educación, cultura, seguridad social, disfrute de prestaciones públicas y de condiciones mínimas de vida.

Al final de la campaña electoral la coalición de partidos de la propuesta modernizadora (Polo Democrático) *se vio forzada* a apoyar la candidatura de Proyecto Venezuela representada por Henrique Salas Römer ex gobernador del estado Carabobo, para enfrentar la inminencia del triunfo de Chávez. Frente a un escenario de profunda dislocación y fragmentación del imaginario social y político y con un discurso de interpelación democrático-popular que captaba los sentimientos latentes anti-oligárquicos y anti-imperialista de las clases subordinadas, Chávez triunfaría en las elecciones de 1998 (Laclau, 1978; Parker, 2001).

De ese vacío sin precedentes surgió Chávez, jugando el papel, como otros antes que él, de salvador de la nación. Pero a diferencia de guiones anteriores, esta vez el papel ha correspondido a un Bolívar no sólo popular, sino anti-patricio, apoyado como nunca antes por sectores que habían sentido perder hasta la esperanza. En medio de la devastación de un país empobrecido y polarizado, el mito del progreso chavista ya no puede disimular la división, como antes, frente al espejismo de un futuro bienestar colectivo; el mito ya no es unificador, sino justiciero (Coronil, 2002: 14).

## **El triunfo de Chávez y la politización de lo social**

Con el triunfo electoral el 6 de diciembre de 1998 de Hugo Chávez Frías se transforma radicalmente el escenario político del país. Al evidenciarse las grietas de un sistema político que venía colapsando, adquieren legitimidad nuevos actores sociales y políticos los cuales desplazan los contenidos del debate nacional, centrado en la modernización económica y las utopías del pragmatismo tecnocrático, hacia la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Las profundas mudanzas sociales y políticas que el triunfo del presidente Chávez le imprimen al país implicaban la trasgresión y desestabilización de órdenes y predios antes seguros, la pluralidad de formas participativas de actores emergentes consolidaban un futuro preñado de posi-

bilidades, a la par que la incertidumbre y el desasosiego crecía en los actores políticos tradicionales. Cunde ahora un *tiempo de tumulto*, de efervescencia pública resultante de la politización de lo social. La discusión sobre grandes temas ha dado paso a la discusión apasionada y acalorada sobre alternativas políticas concretas en amplios sectores populares del país. En todo caso, los debates sobre el futuro político de Venezuela se viven, paradójicamente, no como una transición, como una alteración sin quebrantos, sino como una *ruptura, como un quiebre profundo con el proyecto político anterior*.

El debate pendular sobre democracia y tecnocracia abierto en 1989 se profundizó en 1999 con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De allí, que la crisis de lo político, evidenciada en 1989 persistiera en sus manifestaciones sociales y culturales fundamentales. La apertura de un espacio como la Asamblea Nacional Constituyente para debatir sobre una nueva Constitución permitió la pacificación transitoria de lo político (Slater, 2001: 420). En el transcurso del debate constitucional de 1999 comenzaron a perfilarse algunas diferencias sustantivas respecto a la imagen del país deseado. El debate oscilante entre democracia y tecnocracia abierto en 1989 cobró una dimensión constitucional sin precedentes. Las diferencias entre los proyectos de país apuntaban a dotar de nuevos contenidos a la democracia venezolana. Estas diferencias no se agotaban ni se circunscribían a dos posiciones claramente antagónicas. *En ellas podemos observar la persistencia de solapamientos y transversalidades entre los proyectos políticos en pugna*.

En el transcurso del debate constitucional un conjunto relevante de organizaciones sociales formularon e incorporaron propuestas comunes y participaron de los debates de la ANC. Esto contrastaba con los escasos logros del debate sobre la reforma constitucional de la década de los noventa. La participación sobre diversos tópicos marcaba una diferencia sustantiva respecto al carácter corporativo del debate de los noventa (García Guadilla, 2003: 240). Con la anuencia del presidente Chávez y en el marco de profundas movilizaciones sociales y políticas se impuso constitucionalmente el proyecto político del chavismo. Posteriormente, mediante referendo el 15 de diciembre de 1999 se aprobó una nueva Constitución, para la ahora recién llamada República Bolivariana de Venezuela.

Con la aprobación de la Constitución se desplaza el debate público nacional hacia la construcción de la nueva institucionalidad. Independientemente de las innovaciones institucionales y del debate sobre las bondades de la Constitución de 1999 el gobierno del presidente Chávez se enfrentaba a un conjunto complejo de dificultades en su novel gestión de gobierno. Para ello, había solicitado en 1999 y posteriormente en el año 2000 una ley habilitante con el objeto de legislar en materias consideradas perentorias. Esto acontece en momentos en los cuales las manifestaciones sociales y políticas a favor o en contra de Chávez se convierten en un evento cotidiano. De cualquier manera, esta novedosa fenomenología ha supuesto la revalorización del espacio público como ámbito de creación de sentido, tanto para la oposición política al gobierno como para los afectos al presidente Chávez. Pero, además, ha significado un proceso de aprendizaje social y político y una revalorización de la propia noción



de derechos de ciudadanía. Inclusive ha implicado un profundo desplazamiento en las formas institucionalizadas de la política venezolana, y por consiguiente, ha significado un cambio progresivo de las culturas políticas dominantes durante los últimos quince años en Venezuela.

Más sin embargo, con los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, y sus repercusiones obvias más allá de las fronteras estadounidenses, el debate político en Venezuela adquirió un nuevo talante. *La defensa de la América Amenazada* realizada por el presidente de los Estados Unidos George W. Bush se convirtió en una poderosa estrategia de la oposición política al presidente Chávez.<sup>16</sup> Para Julio Borges portavoz fundamental del Partido Primero Justicia “la globalización del terrorismo puede tocar a Venezuela y hay que estar alerta. Esto representa un ataque a los valores occidentales, y *esto nos incluye*” (*El Nacional*, 16/09/01). La cadena de equivalencias establecidas entre los casos Ballestas y Montesinos, las relaciones con la guerrilla colombiana, la carta a El Chacal y los abrazos a Hussein y a Kadafi se convirtieron en una justificación de la incipiente estrategia. Un importante columnista del diario *El Nacional* como Luis García Mora llegó a afirmar que, “ojalá que la onda anti-terrorista mundial desatada por la carnicería de las torres gemelas y la que ahora le sigue termine por alcanzar también al presidente Chávez” (*El Nacional*, 16/10/01).

La campaña sistemática de cuestionamiento y descrédito (sobresaturación y reiteración comunicacional), las críticas a la retórica presidencial y la necesidad de priorizar las relaciones con los Estados Unidos, se transformaron rápidamente en temas de la agenda pública nacional y simultáneamente en tópicos fundamentales del *cemento ideológico* de la oposición política. La reactualización cultural del debate decimonónico entre *civilización y barbarie* por parte de la oposición al gobierno del presidente Chávez cobró una significación simbólica sin precedentes. Psicológicamente, Estados Unidos se convirtió en un aspecto ineludible de la identidad nacional y de la subjetividad cultural de amplios espacios de la población venezolana (principalmente la clase media). Si deseamos comprender la eficacia simbólica de esta poderosa estratagema, tenemos que reconocer que Estados Unidos no ha sido una fuerza simbólica externa a nosotros sino que vive y se inscribe dentro de la constitución de nuestra subjetividad. En este sentido, el fin formal del colonialismo no borró sus efectos culturales, por el contrario sigue formando parte de la historia y de la subjetividad local del país, en tanto y en cuanto estructura valorativa de orientación de conjuntos importantes de la población venezolana.

El efecto político y cultural del 11 de septiembre en la oposición política del país, no sólo puede comprenderse *como aspiración colonial a la modernidad estado-*

---

16. Partidos políticos tradicionales como AD, COPEI, la Causa R y el MAS, conjuntamente con partidos emergentes como Proyecto Venezuela, Primero Justicia y Solidaridad comienzan a integrar un frente de oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Pero además, líderes regionales entre los que se cuentan gobernadores y alcaldes, la CTV y Fedecámaras se convierten en actores políticos fundamentales en los meses venideros del año 2002.

*unidense*, también visibilizaba las *incertidumbres* más generales y dramáticas de la oligarquía venezolana, de sectores importantes de la clase media profesional y principalmente de la oposición política al presidente Chávez respecto a los posibles decursos de la acción social y política del país. El debate sobre la *América Amenazada* en el país movilizaba mitos racistas, en tanto sistema de superación imaginaria del foso que separaba *la civilización* representada por la intelectualidad, la clase media y la oligarquía venezolana; de *la barbarie* representada por la masa, la chusma y los círculos bolivarianos que apoyaban al presidente Chávez. En definitiva, cimentada en una estrategia de *racialización* de lo social, desde diversos canales de mediación se promocionaban y organizaban sentimientos, confiriéndoles a éstos una forma estereotipada. Esta combinación de prácticas, de discursos y representaciones en una red de estereotipos afectivos permitió la discriminación espacial de individuos y colectividades, y la sedimentación de actos de desprecio y agresión. La racialización como discurso se articulaba también con la resurrección posmoderna de un cierto número de nostalgias políticas y económicas.

La apelación nostálgica (estructura de sentimientos) de la oposición a los procesos de reforma económica y política de la década de los noventa, por lo demás tan dudosa y poco fidedigna, recuperaba una *cierta autoridad simbólica*. La cuestión de recatologar y transcodificar el pasado reciente acerca de los procesos de reforma de los noventa tenía su propia relevancia: una reorganización y reescritura de los sentimientos y valores canónicos de lo *específicamente venezolano*. Dicho de otro modo, se trataba de una operación interpretativa que buscaba fortalecer la idea de un *apocalipsis* que ya ha ocurrido. Esta prodigiosa estratagema de re-escritura tenía el efecto añadido de reabsorber de manera nostálgica el pasado reciente del país.

En consecuencia, y como corolario práctico de la nostalgia restauradora, si fuera posible expulsar la barbarie (Hugo Chávez Frías) del país, los profundos dilemas políticos y desafíos civiles, políticos, sociales y culturales se arreglarían por sí solos. Entonces, presumiblemente, retornaría la edad del crecimiento económico y el bienestar social, y los venezolanos reencontrados por fin podríamos vivir juntos, *felices para siempre*. De cualquier manera, *la ceremonia de auto-olvido* de la oposición política al presidente Chávez no carece de su *sintomatología neurótica*. La nostalgia restauradora establece una relación unívoca con el país, su efecto típico es concretar el pasado en un friso de clichés, que incapacita por consiguiente las acciones sociales y políticas innovadoras en el presente.

La eficacia de cada una de las estrategias político-simbólicas se combinaba con la propia dinámica sociopolítica del país. El 13 de noviembre del año 2002, el gobierno anuncia la aprobación de un paquete de leyes incluidas en la Ley Habilitante, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, la Ley de Pesca y la Ley de Hidrocarburos. La aprobación de estas leyes desató una polémica en actores políticos de la oposición y en sectores corporativos importantes del país. Para el 10 de diciembre de 2001 a través de Fedecámaras y la CTV se anuncia el primer paro general de empresarios y trabajadores. Al paro del 10 de diciembre se le sumaron un conjunto importante de manifestaciones públicas, así como la lucha simbólico-político por las fechas

relevantes de nuestra reciente historia política —un claro ejemplo de ello son las distintas manifestaciones convocadas para la celebración del 23 de enero.

Más allá, de la eficacia simbólica de la estrategia de reescritura histórica y su combinación con la propia dinámica sociopolítica del país, con el llamado a paro el 9 de abril de 2002, la sociedad venezolana entraba en un *punto de no-retorno*. Paro que convocan Fedecámaras y la CTV a través de sus líderes fundamentales, Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, respectivamente. *Este paro tenía como telón de fondo un debate sobre PDVSA, su orientación económica-estratégica fundamental, los criterios de selección de la junta directiva y los beneficios de la principal industria del país.*<sup>17</sup> La convocatoria a la marcha del 11 de abril se realizó entonces en solidaridad con la destituida junta directiva de PDVSA —la cual incluía al General Guaicaipuro Lameda, su presidente, quienes aducían la violación de los criterios tradicionales —meritocracia— de nombramiento de la junta directiva.

El 11 de abril luego de una extraordinaria movilización social que va desde el edificio de PDVSA con sede en la urbanización Chuao ubicada al este de la ciudad de Caracas y que se desvía hacia el centro político del país, es decir, Miraflores, se da un Golpe de Estado que depone al Presidente Chávez. En dicho golpe participan miembros del Alto Mando Militar, los medios de comunicación social, representantes de los partidos políticos tradicionales, la Iglesia Católica y la extrema derecha venezolana. También existen conexiones manifiestas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El día 12 de abril por distintos medios de comunicación (impresos y audiovisuales) tanto los gobiernos de Estados Unidos y España como el FMI reconocieron rápidamente al *gobierno de facto* que todavía no había revelado su *verdadero rostro*.

El 12 de abril Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras con el apoyo de los sectores golpistas, se proclama Presidente de la República de Venezuela (eliminando la nominación de Bolivariana) y disuelve en cadena nacional de radio y televisión los poderes legítimamente constituidos. Entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de abril, en un acontecimiento sin precedentes en la historia política de América Latina, se producen intensas movilizaciones populares en múltiples lugares del país. Dichas movilizaciones cuentan con el apoyo implícito y explícito de la FAN y permiten que Chávez retorne a la Presidencia de la República el 14 de abril en la madrugada. Posteriormente, en la propia madrugada con un mensaje de reconcilia-

---

17. Desde el inicio del gobierno del presidente Chávez se ha venido reorientando la política petrolera nacional. Los lineamientos fundamentales de la política petrolera han sido los siguientes: a) recuperación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como rector en el diseño, en la definición e instrumentación de las políticas públicas referidas al sector, revirtiendo las tendencias que operaban desde la nacionalización del petróleo y que suponía la autonomización de PDVSA respecto al MEM; b) aumento progresivo de los ingresos fiscales de origen petrolero. Para ello la reforma en el sector prioriza la regalía sobre los impuestos. La recaudación de los ingresos por regalía es mucho más sencilla y transparente. El monto total recaudado a través de la regalía depende los volúmenes producidos y del precio en el mercado internacional, mientras que los impuestos a las ganancias implica complejos procesos de auditoría; c) la reforma tiene como finalidad fortalecer [continúa]

ción nacional y con el compromiso de activar el Consejo Federal de Gobierno, Chávez reasume la presidencia del país. En dicho mensaje, como parte de la misiva de reconciliación nacional Chávez *destituye a la junta directiva recién nombrada de PDVSA*.

Más allá, del contenido del mensaje de la alocución presidencial, el debate pendular sobre democracia y tecnocracia abierto en 1989 se profundizó en los meses subsiguientes. Los desgarradores empujes de las luchas sociales y políticas su recalificación y multiplicación no han cesado de transformarse. En todo caso, la geografía de la participación ciudadana ha apuntado a profundizar la segregación espacial y ecológica de la ciudad de Caracas —y del país en general, en dos proyectos con expresiones políticas inconmensurables, vg. De Chacaito hacia el este y de Chacaito hacia el oeste. De un lado, la plaza Altamira se convirtió en los meses siguientes al golpe de abril en el símbolo político de la oposición al presidente Chávez. La plaza Altamira es convertida simbólica y políticamente en la plaza de la Libertad. Los temas emblemáticos que aglutinaban a los opositores al gobierno giraban principalmente alrededor de la meritocracia, la excelencia y la defensa de la propiedad privada. Del otro lado, la llamada esquina caliente —esquina de la Plaza Bolívar en el centro del distrito metropolitano— y puente Llaguno son construidos como espacios de resistencia por los afectos al gobierno. Allí los temas dominantes son la igualdad y la democracia participativa y protagónica.

Antes bien, a finales del año 2002 la oposición política concentrada principalmente en plaza Altamira, convoca a un paro general a través de Fedecámaras, la CTV, miembros del alto mando militar del fallido golpe de abril, la Coordinadora Democrática y los principales medios de comunicación social. Este paro, se convertiría en un intento de golpe de Estado por etapas sucesivas. Extendido hacia PDVSA —con la anuencia de importantes sectores internos afectos a la *agenda liberal*— y con consecuencias dramáticas para el país, el llamado a paro se prolongaría material y simbólicamente durante el mes de diciembre. Implicando entre otras cosas ausencia de combustible —gasolina y gas natural principalmente, desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. En todo caso, el paro de diciembre *desnudaba* los perfiles fundamentales del proyecto tecno-económico —globalización neoliberal— de los principales actores políticos de la oposición.

Pero, además, el país nacional a finales de diciembre enfrenta entonces de manera conflictiva a dos proyectos políticos.<sup>18</sup> Por un lado, un proyecto acoplado a la

---

17. [continuación] a la OPEP y las políticas acordadas para la defensa de los precios del petróleo. Desde una perspectiva geopolítica esto supone la búsqueda de caminos alternativos a la globalización neoliberal; d) por último, la reforma frena las tendencias privatizadoras de PDVSA. Este proyecto alternativo con todas sus contradicciones e improvisaciones en materia petrolera, se contrapone a la *agenda liberal de PDVSA* que se venía impulsando internamente con mucho éxito desde mediados de la década de los ochenta por las diversas juntas directivas de PDVSA con participación de sectores internacionales. Un operador político fundamental de la agenda liberal y promotor insigne de la apertura petrolera en el gobierno de Caldera, el ingeniero Luis Guisti aparece como asesor petrolero del gobierno del presidente George W. Bush (Mömmmer, 2003; Lander y López Maya, 2003).

18. En todo caso, los proyectos políticos referidos no son discerniblemente homogéneos. Por el contrario, ambos están sujetos a fuerzas y contra-tendencias internas tanto autoritarias como democráticas.

globalización neoliberal que cuenta con la anuencia de importantes sectores agrupados en la Coordinadora Democrática. Por el otro lado, un proyecto nacionalista democratizante que cuenta con un considerable apoyo de los sectores populares. Antes bien, desde el binomio democracia-autoritarismo pueden hacerse comprensibles los cambios y transformaciones fundamentales de los últimos años en Venezuela. Este binomio da cuenta de una suerte de persistente péndulo asimétrico entre autoritarismo y democracia. En consecuencia, el futuro y la viabilidad de la democracia en el país depende ahora del resultado del choque de fuerzas entre las tendencias democratizantes —ampliación de los derechos ciudadanos y profundización de la democracia— y las tendencias autoritarias —vinculadas a las estrategias político-económicas del neoliberalismo— que hoy operan con mucha fuerza en Venezuela. De cualquier manera, las capacidades innovadoras y creativas de las fuerzas democráticas del país tienen que ser constantes, *pues el riesgo autoritario es permanente*. Esta tarea es tanto más urgente cuanto por democracia se han hecho pasar en el siglo —y aún continúan haciéndose pasar— los regímenes más deleznable. Esto significa que los fundamentos simbólicos de la democracia tienen que arraigar definitivamente en las instituciones públicas y privadas del país.

## Referencias bibliográficas

- Contreras, Miguel Angel (2003) “Descentralización y democracia: Vicisitudes de la política territorial en Venezuela. En Carlos Mascareño (ed.), *Los desafíos de las políticas públicas hacia el siglo XXI: El caso venezolano*, Temas de Docencia. Caracas: CENDES – UCV, pp. 133-158
- Coronil, Fernando (2002) *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Caracas: CDCH-UCV - Nueva Sociedad.
- Dagnino, Evelina (2001) “La política cultural de la ciudadanía, la democracia y el Estado”. En Arturo Escobar, Sonia Alvarez, y Evelina Dagnino (orgs.), *Política cultural & cultura política: Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Editorial Taurus, pp. 51-85
- García-Guadilla, María (2003) “Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía”. En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*. Caracas: Nueva Sociedad, pp. 231-251
- Gómez Calcaño, Luis (1997) “Ciudadanía, política social y sociedad civil en América Latina”. *Cuadernos del Cendes*, Año 14 (36):11-34. (Centro del Estudios del Desarrollo, UCV, Caracas).
- Kornblith, Miriam (1998) *Venezuela en los noventa. La crisis de la democracia*. Caracas: Ediciones IESA.
- Koselleck, Reinhart (1993) *Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Laclau, Ernesto (1978) *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*. México: Siglo XXI Editores.
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1987) *Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI Editores.

- Lander, Edgardo (1995) *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: CDCH, UCV.
- Lander, Luis y Margarita López Maya (2003) “Venezuela, golpe y petróleo”. En Luis Lander (ed.), *Poder y petróleo en Venezuela*. Caracas: FACES, UCV – PDVSA, pp. 11-17.
- Levine, Daniel (2001) “Diez tesis sobre la decadencia y crisis de la democracia en Venezuela. En José Vicente Carrasquero, Thais Maingon, Thais y Friedrich Welsch (ed.), *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: CDB Publicaciones – RedPol, pp. 10-35.
- Lomabardi, John (2003) “El permanente dilema de Venezuela: antecedentes de las transformaciones chavistas”. En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 11-18.
- López Maya, Margarita (1997) El repertorio de la protesta popular venezolana entre 1989 y 1993. *Cuadernos del Cendes*, Año 17 (43): 109-130. (Centro de Estudios del Desarrollo, UCV, Caracas).
- López Maya, Margarita (1999) “La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993. En el umbral del neoliberalismo”. En Margarita López Maya (ed.), *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*. Caracas: Nueva Sociedad - CENDES, CEAP, FACES, UCV - Cátedra América Latina, pp. 211-235.
- López Maya, Margarita y Luis Lander (2000) “Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela”. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 6 (3): 185-206 (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas).
- Mommer, Bernard (2003) “Petróleo subversivo”. En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*. Caracas: Nueva Sociedad, pp. 167-185.
- Mouffe, Chantal (1999) *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo y democracia radical*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Parker, Dick (2001) “El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario”. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 7 (1): 13-44. (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas).
- Slater, Dave (2001) “Repensar la espacialidad de los movimientos sociales: fronteras, cultura y política en la era global”. En Arturo Escobar, Sonia Alvarez, y Evelina Dagnino (orgs.), *Política cultural & cultura política: Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Editorial Taurus, pp. 411-435.
- Popper, Karl (1981) *La sociedad abierta y sus enemigos*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Rey, Juan Carlos (1989) *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: Colección IDEA.
- Roberts, Kenneth (2003) Polarización social y resurgimiento del populismo. En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*. Caracas: Nueva Sociedad, pp. 75-95.
- Witgesntein, Ludwig (1972) *Sobre la certidumbre*. Buenos Aires: Editorial Nuevo Tiempo.